

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISION LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	Rafael Fritman Toro
DEMANDADOS	Cooperativa de Transportadores TAX SOCIAL LTDA – COOTRANSOCIAL y Colpensiones
PROCEDENCIA	Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito
RADICADO	05001 3105 021 2018 00334 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 072 de 2021
TEMAS Y SUBTEMAS	Declaratoria de existencia de contrato laboral – no acredita prestación personal del servicio por el tiempo que afirma ni extremos de la relación laboral
DECISIÓN	Confirma sentencia

Hoy, **veinte (20) de abril de dos mil veintiuno (2021)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza, y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento en relación al recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandante frente a la sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario laboral promovido contra la **Cooperativa de Transportadores TAX SOCIAL LTDA – COOTRANSOCIAL- y Colpensiones**

La Magistrada ponente en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 del 04 de junio de 2020, en concordancia con los Acuerdos del Consejo Superior y Seccional de la Judicatura, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto, estudiado, discutido y aprobado en sala virtual mediante acta **Nº 12**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

Antecedentes

El demandante convocó a juicio a Cootransocial, pretendiendo se declare la existencia de un contrato laboral a término indefinido entre enero de 1974 y diciembre de 1998, en consecuencia, se condene al pago de los aportes al sistema general de pensiones dejados de realizar durante el tiempo laborado, ordenándosele a Colpensiones recibir dichos rubros y con ellos le reconozca y pague la pensión de vejez, los intereses moratorios o la indexación. También pide costas procesales.

Para sustentar sus pretensiones indicó que laboró al servicio de Cootransocial de forma ininterrumpida del 1 de enero de 1974 al 31 de diciembre de 1998, desempeñándose como conductor de taxi, tal y como se pudo constatar de la certificación emitida por la entidad, labor que desempeño de manera constante, personal, indelegable y bajo continua subordinación, siguiendo oportunamente las ordenes, horarios e instrucciones brindadas por su empleador; que Cootransocial no lo afilió al sistema de seguridad social pese a que era su obligación; que solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez ante Colpensiones, al haber cumplido los 60 años, la cual fue negada en Resolución 109416 del 2010, por no acreditar el número mínimo de semanas exigidas, otorgándosele la indemnización sustitutiva, insistiendo en tal pretensión el 14 de febrero de 2018.

En auto del 29 de junio de 2018 se admitió y ordenó dar trámite a la acción, decisión debidamente notificada a las demandadas, quienes allegaron escritos de contestación así:

Colpensiones, acepta solo lo relativo al contenido de la Resolución mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, frente a los demás supuestos de hecho esgrime que no le constan. Se

opuso a la prosperidad de las pretensiones dirigidas en contra de la entidad, formulando las excepciones de mérito que denominó inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de vejez, improcedencia de intereses de mora, improcedencia de la indexación, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas, compensación y la genérica.

Cootransocial Ltda, admite lo concerniente a la edad del accionante, frente a los demás supuestos de hechos afirma que no le constan y deben probarse en el transcurso del proceso. Con relación a las pretensiones elevadas en su contra adujo que se atiene a lo que resulte constatado. Finalmente propuso las excepciones de prescripción, inexistencia del derecho sustancial, y buena fe.

La primera instancia culminó con sentencia proferida por el Juzgado 21 Laboral del Circuito, en la que absolvió a las demandadas de las pretensiones incoadas en su contra, declarado probada la excepción de no acreditación de los extremos temporales del contrato de trabajo, absteniéndose de imponer costas al demandante.

Argumentó el fallador que de conformidad con los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, al trabajador le corresponde demostrar la prestación personal del servicio, para que se presuma la existencia del contrato de trabajo, no obstante, no se libera de acreditar los extremos en los cuales se desarrolló el vínculo, encontrando para el caso particular que el actor si bien probó la prestación personal del servicio, no probó que el mismo se hubiese desarrollado de manera continua e ininterrumpida, pues, lo que se advirtió fue que se desplegó de manera interrumpida, lo cual no desvirtúa la certificación emitida por la entidad que da cuenta que laboró del 74 al 98, en tanto, durante el lapso que indica que estuvo en la empresa existen cotizaciones a pensiones por parte de otros empleadores, lo cual demuestra una solución de continuidad, sumado, a que no se evidencian los extremos

en los cuales efectivamente laboró al servicio de la demandada, por lo que absolvió del pago de los aportes a seguridad social, absteniéndose en consecuencia, de emitir algún tipo de condena en contra de las accionadas al ser el fundamento de ello la declaración de la existencia del vínculo laboral.

Recursos de apelación

Oportunamente interpuesto por el apoderado del demandante, quien solicita la revocatoria de la decisión, argumentando para ello que, con el acervo probatorio quedó acreditada la prestación personal del servicio de manera ininterrumpida como conductor de los taxis de Cootransocial, siendo así expuesto por la testigo allegada, la cual indicó que los dueños de la empresa siempre compraban y vendían vehículos, por tal, mientras se encontraban vinculados, así como por el periodo que se hacía su trámite de afiliación a la empresa, eran conducidos por el señor Rafael en uno de los dos horarios designados para tal fin, debiéndose considerar por demás, que la entidad certificó que el actor laboró de 1974 a 1998 con ellos, sin que sea posible argumentar que no se establecieron los extremos de la relación laboral, debiéndosele dar valor al principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecido en el artículo 53 de la Constitución.

Afirma que, existe solidaridad entre la empresa de taxis y los dueños de los vehículos frente al no pago de los aportes a seguridad social en pensiones, en tanto, es obligación de los mismos velar por el cumplimiento de dicha obligación, la cual, por demás, le ha acarreado al actor un perjuicio.

Dando aplicación a lo establecido en el artículo artículo 15 del Decreto 806 del 04 de junio de 2020, se le corrió traslado a las partes para alegar, haciendo uso de ellos el demandante solicitando la revocatoria de la decisión, para ello esgrime que se deben interpretar armónica y sistemáticamente los medios de convicción aportados al proceso, como las historias laborales, los testimonios y las certificaciones emitidas, las cuales

dan cuenta que efectivamente se dio una relación laboral continua por espacio de 24 años, en la cual no se realizaron aportes, siendo necesarios los mismos para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, en acatamiento de lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990, al ser beneficiario del régimen de transición.

Consideraciones

De conformidad con lo expuesto, debe decirse que **el problema jurídico** a resolver, consiste en determinar si en el caso particular hay lugar a revocar la decisión revisada y con ello declarar la existencia de un contrato de trabajo celebrado de manera verbal y a término indefinido, de darse respuesta positiva se analizará lo concerniente al pago de aportes a pensiones por dicho lapso.

Pues bien, afirmando el demandante la existencia de vínculo laboral le corresponde a este acreditar los supuestos para la configuración del mismo en los términos del artículo 23 del Código Sustantivo Laboral, siendo relevante el referido a la prestación personal del servicio, pues con este entra a operar la presunción de contrato de trabajo contemplada en el artículo 24 de la misma obra, como una ventaja probatoria a favor de la parte más débil de la relación laboral, que puede ser desvirtuada por la contraparte, demostrando que se trata de un contrato regido por norma diferente o que el mismo no se dio.

Lo anterior significa, que al demandante le basta con probar la prestación o la actividad personal, para que se presuma el contrato de trabajo y es a la parte demandada a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que queda beneficiado quien presta el servicio, que se traduce en un traslado de la carga probatoria, demostrando que la actividad contratada se ejecutó o realizó en forma autónoma, totalmente

independiente y no subordinada, bajo un nexo distinto del laboral, sin que ello se torne en una prueba diabólica. Sobre el particular véase la sentencia SL4027-2017 y SL 365 de 2019.

Ahora, es de advertir, que dicha presunción, no releva a la parte actora de otras cargas probatorias, tales como acreditar los extremos temporales de la relación, el monto del salario, su jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario si lo alega, el hecho del despido cuando se demanda la indemnización por terminación del vínculo sin justa causa, entre otros, indicando la Corte Suprema de justicia Sala de Casación Laboral, en sentencia del 06 de marzo de 2012:

*[...] recuerda la Corte que la circunstancia de quedar demostrada la prestación personal del servicio, debiéndose presumir la existencia del contrato de trabajo en los términos del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, **no releva al demandante de otras cargas probatorias, pues además le atañe acreditar ciertos supuestos transcendentales dentro de esta clase de reclamación de derechos, como por ejemplo los extremos temporales de la relación, el monto del salario, su jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario si lo alega, el hecho del despido cuando se demanda la indemnización por terminación del vínculo sin justa causa, entre otros.***

De antaño se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a su vez a quien pretende o demanda un derecho, que alegue y demuestre los hechos que lo gestan, o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria, cuando se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado.” (Resalto fuera del texto). (En igual sentido, véanse las sentencias: rad. 36748 de 2009, SL9156-2015, SL11156-2017, SL4912-2020).

Esto en virtud del principio de la carga de la prueba o autoresponsabilidad, consagrado en los artículos 164 y 167 del C.G.C, aplicable por remisión normativa del artículo 145 del C.P.T. y S.S; es así como las partes están obligadas a probar el supuesto de hecho de las normas jurídicas que

consagran el derecho que reclaman, manteniendo la obligación de aportar los soportes en que se basan sus afirmaciones, con las cuales pretenden se les reconozca un derecho, la aplicación de una norma, o un efecto jurídico particular; el no hacerlo conlleva inexorablemente a la negativa de éstos.

En desarrollo de tales preceptos normativos, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 25 de octubre de 2011, radicado 37547 con ponencia Gustavo José Gnneco Mendoza de sostuvo:

"(...)La Sala considera que el Tribunal no distorsionó el verdadero sentido de la regla de juicio de la carga de la prueba, contenida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil –aplicable al procedimiento del trabajo y de la seguridad social, merced a lo dispuesto en el artículo 145 del estatuto de la materia-, porque la carga de la prueba del tiempo servido por el trabajador al empleador la soporta el primero, de modo que la falta de demostración del tiempo de servicios comporta que no hay posibilidad para condenar al pago de prestaciones, salarios e indemnizaciones."

Luego, examinada en su conjunto la prueba aportada, se tiene que no se logran acreditar los elementos esenciales de un contrato de trabajo, pues no queda evidenciada la prestación personal del servicio del demandante a favor de accionada, ello es, que ejerciera ciertas labores o tareas de manera personal para la demandada durante el periodo en que reclama acreencias de tal naturaleza, esto es, entre el 1 de enero de 1978 y el 31 de diciembre de 1998, en tanto, véase en el interrogatorio de parte que se le realizó de manera oficiosa por el despacho, frente a la pregunta, durante el tiempo que usted laboró al servicio de la demandada también prestó el servicio a otras empresas afiliadoras de vehículos de taxis o solo para taxsocial? **Respondió** que *"Eran 3 socios, entonces ellos se mantenían vendiendo y comprando carros de distintas empresas, entonces bajaba uno a trabajar por la tarde y le decía no, el carro se vendió, este bajando que yo le hago turno, nos ponían de caimanes mientras que ellos compraban carros, compraban carro entonces bajaba uno y le decía váyase y madrugue mañana para que vaya a tal empresa y le*

*den permiso para trabajar /.../ eran 3 socios, Bernardo Mejía, Orlando Piedrahita e Iván Aguirre, eran los socios principales de la empresa, hasta buses maneje yo para descansar del trasnocho, yo maneje buses de ellos mismos de Bello y de Villahermosa”, de igual forma indicó que los tres socios de la empresa, iban a diferentes sociedades de taxis, y compraban y vendían, se mantenían negociando, y a él le entregaban los taxis mientras “*hacían las vueltas en el tránsito para pasarlos a Tax Social*”*

Por su parte **José Gabriel Ruiz Trujillo**, quien laboró en Tax Social entre 1994 y 2014, afirmó conocer al actor al haber laborado con él en esa empresa, no obstante, a la pregunta *¿Sabe usted, don Rafael desde cuando hasta cuando elaboró conduciendo un taxi afiliado a cootrassocial?* Adujo “*Pues, yo lo conocí allá en Tax Social pero que recuerdo en este momento de qué año y cuánto tiempo, no doctor, no recuerdo, pero sí recuerdo que él estaba en Tax Social afiliado por uno de los asociados a la empresa*”. Y al interrogante, sabe usted si cuando él trabajó al servicio de Tax Social lo hizo de manera continua o intermitente, unos periodos si y otros periodos no? **Respondio** “*cuando yo lo conocí, por lo que tengo entendido el trabajo otro tiempo en Tax Social, cuando yo lo conocí el llego a Tax Social a trabajar en un vehículo de Tax Social, ahí fue la relación con él, ahí fue que conocí yo como empleado de Tax Social de que él estaba trabajándole a un propietario de un asociado de Tax Social*”, afirmando por demás que no conoció si la relación se dio de manera “*continua o discontinua /.../ solamente sé que el trabajo allá, en Tax Social y que me tocó a mí cuando yo estuve ahí verlo como conductor de un taxi, porque usted sabe que los taxis van a la empresa cada mes a renovar su tarjeta amarilla pero de que sé que sea continuo o discontinuo no conozco ese aspecto*” finalmente, y al tratar de investigar el despacho sobre el tiempo laborado por el actor, si fue un año, meses o cuanto, adujo “*le podría precisar doctor que el trabajo en Tax Social, pero como decirle un año, que medio año, que cinco meses, no doctor, no, no recuerdo eso, ya eso tendría uno a mirar archivos y verificar eso*”.

Y la señora **Nubia María Gómez Córdoba**, quien laboró en cootransocial entre 1994 y 2018, manifestó conocer al actor porque el mismo “*trabajo*

para esa empresa con varios patrones que él tuvo allá, yo lo distinguía por eso, porque pagaba la administración allá, e inclusive Don Bernardo era gerente mucho tiempo. Bernardo Mejía y don Iván tenían varios carros allá entonces él le trabajaba a ellos”, y a la pregunta “En que tiempos laboro don Rafael en vehículos afiliados a cootransocial?” esgrimió “la verdad, la verdad, el tiempo si se me sale de las manos porque no recuerdo bien, pero sé que siempre trabajo para Tax Social”, y cuando se le requiere para que indique más o menos cuánto tiempo, adujo “Cuando yo llegue en el 94 el ya hacía muchos años trabajaba allá, exactamente no le sé decir en este momento porque se me sale de la memoria, y dejo de trabajar no recuerdo bien, no recuerdo bien la fecha, el termino más o menos como en el 98 o 99”, y cuando se le interroga sobre si el señor Rafael trabajo con vehículos de otras afiliadoras, manifestó que “era de otras empresas pero era de los mismos dueños de la empresa, que ellos compraban y vendían, pero el siempre trabajo para ellos, ellos eran los dueños de la empresa”.

Teniendo en cuenta lo anterior, así como la libertad de valoración probatoria que le otorga a la Sala el artículo 61 del CPTSS y las reglas de la sana crítica, lo cual respalda la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, entre otras en las sentencias SL13544 de 2014 en la que dijo:

Al efecto y de vieja data la Corte ha considerado que dada la libertad de apreciación de las pruebas que tienen los juzgadores de instancia en virtud de lo establecido por el art. 61 del C.P. del T., el entendimiento que estos le den a aquellas, nace de la autonomía e independencia de que gozan y de la facultad de formar libremente su convencimiento con base en el principio de la sana crítica, que no es más que la lógica y la experiencia.

Por lo dicho, las conclusiones que hace el Tribunal acerca del material probatorio recepcionado, mientras sean lógicamente aceptables, se encuentran cobijadas por la presunción de legalidad, por lo que priman sobre las conclusiones que hacen las partes en relación con el análisis de una o varias pruebas aun cuando dichas inferencias sean también lógicas y de recibo, dado lo cual, debe mantenerse la sentencia con base en esta conclusión del Tribunal.

Encuentra esta instancia que de dichos medios de convicción no se puede establecer el tiempo en el que el actor prestó sus servicios personales a Cootransocial, dado que, tanto este en su interrogatorio como la señora

Nubia, manifestaron que el mismo le conducía taxis a los señores *Bernardo Mejía, Orlando Piedrahita e Iván Aguirre*, y que estos se encontraban afiliados a la demandada, supuestos que no se acreditaron dentro del plenario, pues nótese como no se aporta medio de convicción tendiente a establecer que efectivamente eran socios de la empresa, sumado a que tampoco fueron citados al proceso en tal condición o como personas naturales a fin de acreditarse la relación laboral con los mismos, y con ello llegar una posible solidaridad con la empresa, pues, tal y como lo pregona el apoderado recurrente, entre el dueño del vehículo y la empresa afiliadora existe la obligación de vincular el personal a la seguridad social

Debe agregarse que en el lapso en que se afirma que el actor laboró para Cootransocial y como bien lo esgrimió el juez de instancia, existen cotizaciones a pensiones por parte de otros empleadores como Álvaro Ruiz Gutiérrez, Coop buses Medellín Bello Ltda, Tax Alemania Luis Ruiz, Tax Modelo, Tax Tarapaca y Cía. Ltda., Flota Suave Tax, Hernando Osorio, Tax Ballesteros, Flota Nueva Villa, Flota Bernal, Tax Triunfo Ltda, Humberto Osorio Loaiza, y Blanca Oliva Berrio (fls. 18 a 20), lo que no da lugar a determinar una relación laboral de manera continua e ininterrumpida, y si bien no se desconoce el contenido de las certificaciones visibles a folio 22 y 23, en las cuales se plasma "*certifico que el señor RAFAEL FRITMAN /.../ laboró como conductor, de varios vehículos afiliados a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES TAX SOCIAL "COOTRANSOCIAL". Estuvo vinculado, por espacio de 10 años en los que tuvo muy comportamiento, responsabilidad y se encuentra a paz y salvo por todo concepto*" y "*me permito informarle que el señor RAFAEL FRITMAN TORO /.../ se desempeñó como conductor de varios vehículos afiliados por sus propietarios a nuestra cooperativa desde el año 1974 hasta el año 1998*", también lo es que el contenido de dichas constancias a la luz de lo que quedó demostrado en el proceso, y contrario a lo expuesto por el recurrente, no acreditan contundentemente que lo registrado en las mismas se aviene a la realidad, por lo que no se puede tener las mismas como única prueba para la

acreditación de los extremos de la relación que ligó a las partes, y con ello, condenar al pago de un título pensional, pues, tratándose de un asunto que involucra el sistema de seguridad social, al conllevar la decisión efectos pensionales, le correspondía al actor, allegar medios de convicción convincentes y que acreditaran de manera clara y precisa las supuestos de hecho que estaba pregonando, tal como lo acepta el órgano de cierre de la Jurisdicción Ordinaria Laboral, esto es, existir por lo menos fechas aproximadas de inicio y terminación desde el punto de vista probatorio y no solo la afirmación del demandante, pues, en este punto, resulta de vital importancia, dentro de la carga probatoria del actor, acreditar los extremos temporales de, por cuanto ante la falta de certeza o aproximación, la decisión será contraria a sus intereses, a pesar de tener probada la prestación del servicio personal, reiterándose, que ha sido criterio reiterado de nuestro órgano de cierre, que al actor no solo le basta con ganarse la presunción legal del artículo 24 del CST., sino que también debe probar otros aspectos relevantes del contrato de trabajo, como lo es precisamente la época de vigencia del mismo, lo que para el caso no se acreditó, por lo que se confirma la sentencia objeto de revisión.

Costas en esta instancia a cargo del recurrente y en favor de las demandadas, inclúyanse como agencias en derecho la suma de \$100.000,00.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de esta ciudad dentro del proceso ordinario promovido por **Rafael Fritman Toro** en contra de **Cootransocial Ltda y Colpensiones**.

Costas en esta instancia a cargo del recurrente y en favor de las demandadas, inclúyanse como agencias en derecho la suma de \$100.000,00.

Lo resuelto se notifica a las partes por **estados virtuales**, artículo 295 C.G. del P. en concordancia con el 15 del Decreto 806 de 2020.

Los magistrados (firmas escaneadas)


LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL
Magistrada


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado

Certifico: Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS No. 067** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8:00 a.m. Medellín, **22 de abril de 2021.**

Secretario